

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2329-2022
CARATULADO : HENRÍQUEZ/FISCO (CONSEJO DE DEFENSA
DEL ESTADO)

Santiago, ocho de Noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

Comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N°707, comuna de Santiago, en representación convencional de don Juan Carlos Henríquez Lucero, antes de nombre Juan Alberto Enrique Henríquez Lucero, pensionado, domiciliado en Río Limarí N° 1970, Arcos de Pinamar, Compañía Baja, comuna de La Serena, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas 1225, piso 4°, comuna y ciudad de Santiago.

Señala que su representado, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1, N° 9.292, con su antiguo nombre de Juan Alberto Enrique, a la época de los hechos que expondrá, contaba con 20 años de edad y era militante de las Juventudes Comunistas. Además, hasta el 11 de septiembre de 1973 se desempeñó como alarife en la Corporación de la Vivienda (CORVI).

Relata que entre septiembre de 1973 y julio de 1974 su representado fue detenido en la vía pública varias oportunidades por “sospecha”, hasta que el 18 de julio de 1974 sin mediar orden judicial, fue detenido por Carabineros en la comuna de Lo Espejo y trasladado a la Comisaría, donde quedó incomunicado y fue sometido a torturas mediante golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, desnudado y mojado con agua fría, para después ser encerrado en un calabozo y liberado al día siguiente, sin mayores explicaciones, sufriendo durante el año 1975 varias detenciones, traslados a recintos policiales, siendo privado de libertad y golpeado arbitrariamente y en mayo de 1979 fue detenido en el centro de Santiago y golpeado, oportunidad en que perdió el conocimiento despertando en el calabozo de la 1ª Comisaría de Carabineros de Santiago, siendo interrogado y torturado, permaneciendo incomunicado por 5 días e ingresado luego a la Penitenciaría y acusado de vulnerar la Ley de Seguridad Interior del Estado, en causa Rol 10-79 de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, lugar donde quedó junto a los presos políticos. Permaneció privado de libertad en la Penitenciaría por otros diez días, quedando finalmente en libertad por falta de méritos. Señala que por esta última detención se presentó un recurso de amparo a su favor, Rol 286-79, ante la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, sin resultados.



Indica que los hechos antes descritos han provocado consecuencias psicológicas y físicas hasta la fecha; dentro de las primeras, crisis de pánico, miedo, depresión, problemas para dormir y pesadillas, recurrentes, relacionadas con los abusos y violencia sufridas; en cuanto a las segundas, tiene marcas en su piel, desarrolló asma y padece de mal de Parkinson cuyo origen proviene de las torturas y apremios de que fue objeto. Pese a los tratamientos psicológicos, las vivencias sufridas fracturaron la vida de su representado.

Por los hechos precedentemente expuestos, es que demanda al Fisco de Chile, por daño moral, a consecuencia directa del perjuicio ocasionado funcionarios de Carabineros de Chile, actuando en calidad de tales en la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), más reajustes de acuerdo al Índice de precios al Consumidor e intereses desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago y costas,

Invoca como fundamento normativo los tratados internacionales sobre de derechos humanos, en especial sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Constitución Política de 1925, la actual Constitución Política de 1980; la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y jurisprudencia, entre otros.

Sostiene además que las normas sobre prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no es aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que la acción ejercida en autos tiene el carácter de imprescriptible, concurriendo todos los requisitos para la procedencia de la indemnización solicitada: en cuanto al daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume; acción u omisión emanó de un órgano del Estado, agentes del Estado, quien fue torturado sin que pueda existir justificación ni legítimo proceder en ello. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal; nexo causal, el daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito civil; y, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Por lo expuesto solicita tener por interpuesta la demanda y en definitiva acogerla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los hechos descritos, la suma de \$200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con costas.

Con fecha 4 de mayo de 2022 fue notificada la demanda al demandado.



Con fecha 26 de mayo de 2022 el Fisco de Chile, debidamente representado, contesta la demanda en los siguientes términos:

En primer lugar opone la **excepción de reparación integral**, fundada en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el actor conforme a las leyes nacionales de reparación del Estado de Chile.

Argumenta que la reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos se ha realizado principalmente por medio de tres tipos de compensaciones, a saber: a) transferencias directas de dinero; b) asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, c) reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En lo que concierne a la primera modalidad, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos, la discusión radicaba entre quienes sostenían que debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros estimaban que a través de una pensión vitalicia, ambas con fines resarcitorios.

Indica que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de pensiones la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); en concepto de bonos ha asignado la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley N°19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley N°19.992; en cuanto a desahucio (bono compensatorio), la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N°19.123; y por Bono Extraordinario (Ley 20.874), la suma de \$23.388.490.737.-

Consecuencia de lo anterior, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio; basta con sumar las cantidades pagadas a la fecha, más las mensualidades que todavía quedan por pagar.

En cuanto a las reparaciones específicas, señala que el actor ha recibido los beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y 19.234 y sus modificaciones.



Así la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, estableciendo como pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores

Se concedieron, asimismo, beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en lo referente a las reparaciones simbólicas, señala que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Indica que este tipo de acciones pretende reparar tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. A modo de ejemplo destaca la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y, la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DD.HH., tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

Concluye que de todo lo expresado hasta ahora existe una identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones ya realizadas, los



esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica, tanto la indemnización solicitada en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, la acción interpuesta pretende indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de autos.

En subsidio de la excepción de reparación integral, opone la excepción de **prescripción extintiva** de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción.

Señala que según el relato efectuado por el actor, la detención ilegal y torturas ocurrieron en diversas ocasiones no especificadas entre septiembre de 1973 y julio de 1974, y entre el 1º y el 11 de mayo de 1979.

Sostiene que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda, esto es, el 4 de mayo de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de 4 años que establece el citado artículo 2332 del código ya citado.

En subsidio, para el caso de que el Tribunal considere que la norma anterior no resulta aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación al artículo 2514, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la demanda transcurrió con creces dicho plazo.

En dicho contexto, precisa que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Precisa que el fundamento de la prescripción es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones



en que se desarrolla la vida, es una institución estabilizadora y no como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Aclara que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solo ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, al respecto expresa que el Pleno de la Excma. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 una sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó la controversia en la forma que señala.

Solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis las argumentaciones hechas valer en este punto y la jurisprudencia posterior al citado fallo, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

De otro lado, señala que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Por ello, la acción destinada a exigirla, como toda acción patrimonial, está expuesta a extinguirse por prescripción.

Precisa que, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia (citando al pie variedad de la misma), en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, y tal proceder no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue.

Finalmente, refiere en cuanto a las alegaciones del actor respecto de la imprescriptibilidad de la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, precisa que ninguno de los instrumentos internacionales que detalla contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno de esta materia.



Así, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, sostiene que la **indemnización solicitada es excesiva**.

En cuanto al daño moral sostiene que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio. En dicho sentido, señala que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

De otra parte, señala que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, en consecuencia, el juez habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades, entonces con prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

En subsidio, la regulación del daño moral debe **considerar los pagos** ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, de lo contrario implicaría un doble pago por el mismo hecho.

En un último acápite, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los primeros sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca esa obligación y además, desde que dicha sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, pues antes no existe ninguna obligación para su representado de indemnizar suma alguna, en consecuencia, que reajustar.

En lo que toca a los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil



establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, señala que de acogerse la demanda, tales **reajustes e intereses** sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 1 de junio de 2022 el actor al evacuar la réplica sostiene que la preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no es de ninguna manera incompatible con la indemnización que aquí se persigue, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas, resultando además irreconciliable oponer la excepción de pago con la normativa internacional.

En lo relativo a la prescripción, señala que la Excma. Corte Suprema ha sido enfática en señalar, en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, y conforme a la actual jurisprudencia resultaría discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que reclama.

Señala que la controversia suscitada en cuanto al monto, resulta inútil la discusión, pues será el tribunal en definitiva quien lo determine precisando que en la actualidad aquellas han sido incrementadas en esta materia, acercándose a montos reales y serios.

Con fecha 3 de junio de 2022, el demandado evacúa la réplica reiterando lo las alegaciones, excepciones y defensas expuestas en la contestación.

Con fecha 19 de junio de 2022, se recibió a prueba la causa, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 4 de enero de 2023 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció don Luis Pérez Camousseight, en representación convencional de don Juan Carlos Henríquez Lucero, antes de nombre Juan Alberto Enrique Henríquez Lucero, e interpuso demanda de



indemnización de perjuicios en juicio de hacienda en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, a fin de que se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido con motivo de la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas cometidos por agentes del Estado, la suma de \$200.000.000.-, más reajustes e intereses, o la suma que el tribunal estime, más costas.

Lo anterior, por los fundamentos de hecho y de derecho ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, al contestar la demanda el Fisco de Chile solicita su total rechazo por los argumentos ya reseñados en lo expositivo.

TERCERO: Que, el demandante sustenta su pretensión indemnizatoria en el hecho de ser víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de su persona, producto de la detención y tortura a la que fue sometido por agentes del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Especifica los períodos de detención y privación de libertad, como en general las torturas, secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de los mismos y que afirma han permanecido hasta la fecha.

CUARTO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, toca al actor acreditar los supuestos de hecho en que afina su acción.

QUINTO: Que, a objeto de acreditar sus asertos, el demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, que no fuera materia de objeción contraria:

1.- Copia autorizada de sentencia dictada en causa V-183-2015 por el 2° Juzgado de Letras de La Serena con fecha 9 de septiembre de 2015 que acoge solicitud de cambio de nombre de “Juan Alberto Enrique” por “Juan Carlos”, quedando como “Juan Carlos Henríquez Lucero” y su certificado de ejecutoria.

2.- Copia autorizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de carpeta de antecedentes y solicitud presentada ante la “Comisión Valech” correspondientes a don Juan Alberto Enrique Henríquez Lucero.

3.- Copia de la portada del “Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, y la página de la nómina en que consta el nombre del actor N°11133, RUT N°6.323.722-1 que lo reconoce como víctima de prisión política y tortura.

4.- Copia de página de Informe Valech en que se establece, conforme a la cantidad de testimonios, que durante el período de dictadura militar la Comisaría de Carabineros N°1 de Santiago fue uno de los principales recintos de detención en la zona céntrica y describe los maltratos y condiciones de las personas



detenidas en ella.

5.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad documento de trabajo interno.

6.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978.

7.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980.

8.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, elaborado por asistentes sociales Departamento Jurídico de Vicaría de la Solidaridad Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi.

9.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, elaborado por el Equipo de Salud de la Vicaría de la Solidaridad integrado por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa.

10.- Certificado de Salud de don Juan Carlos Henríquez Lucero, RUT N°6.323.722-1, emitido por PRAIS de Coquimbo de fecha 4 de Agosto de 2022, que concluye que el actor fue víctima de daños físicos y emocionales irreparables en el contexto de represión sistemática perpetrada por agentes del estado de Chile durante el período de dictadura, eventos que impactaron de manera directa y negativa en los ejes transversales de su desarrollo vital y se le recomienda continuar su tratamiento con el equipo especializado PRAIS Coquimbo.

SEXTO: Que, el demandado por su parte solicitó a folio 9 se oficiara al Instituto de Previsión Social a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y las demás pertinentes.

Al efecto, a folio 15 consta informe del Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social que detalla los beneficios de reparación período agosto 1999 a mayo 2022; bono Ley N°19.992 por \$3.000.000.-; aporte único Ley N°20.874 por \$1.000.000.-; pensión Ley N°19.234 por \$38.274.955.-; aguinaldos \$692.503.-, total \$42.967.458.-, pensión actual \$202.277.- precisando que el Sr. Henríquez está individualizado como víctima de prisión política y tortura en el primer informe emitido por la Comisión Valech en diciembre de 2004, señalando que no se registra en el Instituto solicitud del



interesado de rectificación de su nombre.

SÉPTIMO: Que apreciando la prueba producida en autos en forma legal, ha de tenerse por acreditado que el actor fue víctima de apremios ilegítimos y torturas, lo que se tradujo en los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la forma expuesta en su libelo con motivo de diversas detenciones por agentes del Estado de Chile, específicamente en abril y octubre de 1974 como también entre el 1 y 8 de mayo de 1979 en la 1° Comisaría de Santiago.

Es posible constatar también que el actor ha sido beneficiario en distintas capacidades, pensión de la Ley N°19.992, del aporte único de la Ley N° 20.874, junto con aguinaldos y pensión Ley N°19.234, con una pensión actual \$202.277. Dichos montos obedecen a reparaciones a personas exoneradas por motivos políticos y a los titulares individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

OCTAVO: Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor al amparo de los beneficios previstos en las textos normativos precitados, ya sea en transferencias directas de dinero, asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante un conjunto de reparaciones simbólicas que menciona.

NOVENO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.992 establece una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición.

La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con



aquellas otorgadas en las Leyes N°19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley N°19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos (abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva, última de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República, a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello).

DÉCIMO: Que, el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech.

De las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley N°19.234.- que como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que recibe.

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, no procede imputar a la indemnización debida al demandante las cantidades que en calidad de beneficiario de las reparaciones y pensiones haya recibido ya en su respectiva



calidad de preso político o como exonerado político, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.

DUODÉCIMO: Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco en su escrito de contestación.

En primer término, cabe señalar que tratándose de violaciones a los derechos humanos –cual es la calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo séptimo del fallo –el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase en razón de que la pretensión del actor se fundamenta en la privación de libertad y torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Asimismo, se ha constatado que el demandante aparece incorporado en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech, reconocido como víctima de prisión política y tortura; en tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, las reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que *“el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones*



internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

DÉCIMO QUINTO: Que, la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5° de la Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”* y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

DÉCIMO SEXTO: Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que le haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.



No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

DÉCIMO OCTAVO: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción *“se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”*, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

DÉCIMO NOVENO: Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó– que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie, la de establecer responsabilidades –incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su



naturaleza es imprescriptible.

VIGÉSIMO: Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas. Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en síntesis, tratándose la tortura de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los



perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en la especie de la prueba rendida, en especial del Certificado de Salud acompañado, aparece que los eventos represivos vividos por don Juan durante el período de dictadura impactaron de manera directa y negativa los ejes transversales de su desarrollo vital, recomendándosele incluso continuar su tratamiento con el equipo psicológico PRAIS.

Sin perjuicio de lo anterior, la existencia del daño moral en el caso de marras puede presumirse de los hechos asentados en la causa atendida la gravedad del hecho ilícito y las circunstancias en que este aconteció y sus consecuencias, con motivo del dolor y angustia tanto físicas como psicológicas que experimentó el demandante con motivo de sus experiencias de represión política y detención, experiencias traumáticas que sin duda produjeron diversos efectos psicológicos como necesario correlato de haber sido víctima de dichos actos y que justifican la indemnización por daño moral.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos noveno a undécimo que preceden; por ende, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en



consideración para ello la innecesaria, irracional y violenta ocurrencia de los sucesos relatados y sus perniciosas consecuencias, se fija la indemnización solicitada en la suma de \$50.000.000- (cincuenta millones de pesos).

VIGÉSIMO SEXTO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido se le eximirá, en definitiva, del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

I. Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose al Fisco de Chile a pagar a don Juan Carlos Henríquez Lucero, antes Juan Alberto Enrique Henríquez Lucero, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$50.000.000.- de pesos (cincuenta millones de pesos), con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo sexto que precede.

II. Que no se condena en costas al Fisco al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2329-2022

Pronunciada por doña Carolina Taeko Montecinos Fabio, Juez Titular

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, ocho de Noviembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBPYXJSSPBX